

PROYECTO DE ORDEN ... de... de 2022, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública sobre organización y funcionamiento del procedimiento para la puesta a disposición de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal del servicio de asistencia pericial para su intervención en los procedimientos judiciales.

Preámbulo

I

El artículo 49 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana establece que, entre otras materias, la Generalitat tiene competencia exclusiva en “Administración de justicia, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de desarrollo del artículo 149.1.5.^a de la Constitución”.

Asimismo, el artículo 36 del referido Estatuto atribuye a la Generalitat en relación con la Administración de Justicia, entre otras competencias, el ejercicio en la Comunitat Valenciana de todas las facultades que la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio del poder judicial, reconozca o atribuya al Gobierno del Estado, así como proveerla de medios personales, materiales y económicos.

De acuerdo con el artículo 339.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, las designaciones judiciales de peritos a instancia de parte serán a su costa y no pueden ser imputadas a las Administraciones Públicas. La gestión de los peritos judiciales exige, por tanto, la determinación de los supuestos en los que la Administración de la Generalitat debe asumir el coste de su intervención. El examen de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, y de la legislación procesal, permite afirmar que las Administraciones Públicas únicamente asumen el gasto generado por la intervención de perito cuando sea solicitada por la parte beneficiaria del derecho a la asistencia jurídica gratuita, o cuando haya sido acordada por el órgano judicial, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal. Asimismo, le corresponde asumir el coste de las periciales acordadas por el Ministerio Fiscal en la fase de investigación previa al proceso penal y durante la instrucción del procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal del menor, siempre que, de conformidad con la legislación procesal, no tengan que ser a costa de las partes.

La Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, en su artículo 6.6, establece la “asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales, o, en su defecto, a cargo de funcionarios, organismos o servicios técnicos dependientes de las Administraciones públicas. Excepcionalmente y cuando por inexistencia de técnicos en la materia de que se trate, no fuere posible la asistencia pericial de peritos dependientes de los órganos jurisdiccionales o de las Administraciones públicas, esta se llevará a cabo, si el Juez o el Tribunal lo estima pertinente, en resolución motivada, a cargo de peritos designados de acuerdo a lo que se establece en las leyes procesales, entre los técnicos privados que correspondan. El Juez o Tribunal podrá acordar en resolución motivada que la asistencia pericial especializada gratuita se lleve a cabo por profesionales técnicos privados cuando deba prestarse a menores y personas con discapacidad psíquica que sean víctimas de abuso o maltrato, atendidas las circunstancias del caso y el interés superior del menor o de la persona con discapacidad, pudiendo prestarse de forma inmediata”.

II

El Decreto 175/2021, de 29 de octubre, del Consell, de aprobación del reglamento de asistencia jurídica gratuita (DOGV 08/11/2021), regula en su Título V la asistencia

pericial gratuita, estableciendo que el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita eximirá a sus titulares de la obligación de abonar los gastos derivados de las actuaciones periciales practicadas a lo largo del proceso para el que se solicitó dicho derecho. La asistencia pericial gratuita se llevará a cabo por las personas y entidades mencionadas en el apartado 6 del artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero. De este modo, solo excepcionalmente, por resolución motivada del juez o tribunal por la que se estime pertinente la concreta actuación pericial, podrá prestarse asistencia podrá prestarse asistencia pericial gratuita por parte de personal técnico privado cuando concurren las siguientes circunstancias: a) Inexistencia de empleados públicos, personal técnico propio y organismos dependientes de los órganos jurisdiccionales o de la Generalitat o, aun existiendo estos últimos, no cuenten con disponibilidad efectiva en el momento del requerimiento del órgano judicial, o cuando la Administración sea parte interesada en el procedimiento, y b) Cuando no la puedan prestar las entidades adjudicatarias de los contratos administrativos suscritos al amparo de la normativa vigente en materia de contratación del sector público, cuyo objeto sea la prestación del servicio de peritaciones judiciales y de traducción e interpretación.

También establece el referido Decreto que el abono de los honorarios devengados por el personal técnico privado aludido anteriormente correrá a cargo de la conselleria que tenga atribuidas las competencias en materia de justicia, excepto cuando en la sentencia que ponga fin al proceso haya pronunciamiento sobre costas a favor de la persona titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita, cuando, venciendo en el pleito la misma, no existiendo en la sentencia pronunciamiento expreso sobre costas, los beneficios obtenidos por aquélla en el procedimiento superen en tres veces la cuantía de las costas causadas en su defensa y en los supuestos de revocación del derecho de la asistencia jurídica gratuita regulado en el artículo 19 de la Ley 1/1996, de 10 de enero.. En el supuesto de que en la sentencia que ponga fin al proceso, fuera condenada en costas la persona titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita quedará la misma obligada a abonar las peritaciones realizadas por personal técnico privado, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna. Para hacer efectiva dicha obligación, será de aplicación el procedimiento administrativo de apremio previsto en el Reglamento general de recaudación.

Finalmente, el artículo 62 del citado Decreto establece que el coste económico de las peritaciones judiciales vendrá establecido por Orden de la conselleria competente en materia de justicia.

III

Por Orden de 23 de julio de 2001, de la Conselleria de Justicia y Administración Públicas, se reguló la organización y funcionamiento del sistema de peritaciones judiciales en la Comunitat Valenciana. Esta Orden ha sido modificada posteriormente por la Orden 3/2015, de 4 de diciembre, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, en cuanto a la actualización de los importes de las pericias, así como por la Resolución de 19 de julio de 2018 de la Dirección General de Justicia y por la Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia.

A lo largo de estos años, desde diferentes ámbitos profesionales, la peritación judicial ha supuesto una extraordinaria labor de colaboración con los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana, garantizando el derecho fundamental a la defensa y a la tutela judicial efectiva, emitiendo los informes que le han sido solicitados, y que en ocasiones además de la complejidad que conllevan abordan materias especialmente delicadas.

Por todo ello, transcurrido un largo periodo de tiempo desde la publicación de la Orden del año 2001, resulta necesario articular una nueva regulación del sistema de peritaciones cuyo coste deba asumir la Generalitat Valenciana, que desarrolle el Título V del

reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunitat Valenciana, y que permita conjugar la mejora en la prestación del servicio con la obligación de la Administración de hacer uso de los recursos públicos de la manera más eficiente posible.

En este sentido, la presente orden contempla los diversos supuestos de prestación del servicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.2 del Decreto 175/2021, de 29 de octubre, e introduce el uso de las nuevas tecnologías en el sistema de designación de profesionales privados. Además, se recoge el posible reintegro de las cantidades abonadas en aquellos supuestos previstos en el artículo 61 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunitat Valenciana.

Por otro lado, y por lo que respecta al coste económico de las pruebas periciales, la orden contempla como principal novedad la introducción del pago por baremo, en función de la titulación del/de la profesional que realiza la pericia. Para establecer las cantidades se han tenido en consideración las retribuciones medias que otorga la administración a un miembro de un cuerpo para el que se exija titulación similar, así como la consideración de coste social de esta asistencia pericial, por la función social que se realiza. Y todo ello sin perjuicio de la posibilidad de que, en aquellos casos en los que las circunstancias lo aconsejen, el órgano administrativo competente en materia de justicia pueda autorizar, con carácter excepcional, un incremento sobre la cantidad fijada en el baremo.

En virtud de las competencias atribuidas por el artículo 28 letra c) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y de conformidad con el Decreto 172/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública,

ORDENO

Artículo 1. Objeto.

La presente Orden tiene por objeto el desarrollo del Título V del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunitat Valenciana, regulando los siguientes aspectos:

- a) La puesta a disposición de los órganos judiciales y fiscalías del servicio de asistencia pericial cuyo abono corresponda asumir a la conselleria competente en materia de justicia.
- b) El procedimiento de pago de los gastos y honorarios ocasionados por la actuación pericial cuyo coste deba asumir la conselleria competente en materia de justicia, así como su posible reintegro.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Esta Orden será de aplicación a las pruebas periciales practicadas en procedimientos seguidos ante órganos judiciales con sede en la Comunitat Valenciana en los siguientes supuestos:

- a) Cuando se haya reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita al solicitante de la prueba pericial.
- b) Cuando hayan sido acordadas por los órganos judiciales de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal.

c) Cuando hayan sido ordenadas por el Ministerio Fiscal en la fase de investigación previa al proceso penal y durante la instrucción del procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal del menor.

d) Cuando se haya declarado la insolvencia del obligado al pago de la prueba pericial.

2. En los supuestos en que el órgano judicial por disposición legal o resolución judicial deba solicitar asistencia pericial, y concurren como partes procesales o colitigantes beneficiarios del derecho de Asistencia Jurídica Gratuita con no beneficiarios de este derecho, únicamente se abonará con cargo a las dotaciones presupuestarias de Conselleria con competencias en materia de justicia los honorarios que correspondan a la parte procesal o colitigante beneficiario del derecho de Asistencia Jurídica Gratuita, lo que deberá determinarse porcentualmente en la solicitud de la asistencia pericial.

3. Se excluyen del ámbito de aplicación de esta Orden los servicios de asistencia pericial realizados por profesionales que hayan sido acordados a instancia de parte que no tenga reconocido el beneficio de asistencia jurídica gratuita, que serán a su costa y son objeto de regulación por la legislación procesal.

Artículo 3. Prestación del servicio de asistencia pericial gratuita.

La asistencia pericial gratuita se llevará a cabo por las personas y entidades mencionadas en el apartado 2 del artículo 60 del Decreto 175/2021, de 29 de octubre, de aprobación del reglamento de asistencia jurídica gratuita.

Artículo 4. Prestación del servicio por personal empleado público, personal técnico propio y organismos dependientes de la Generalitat.

1. El personal empleado público y el personal técnico adscrito a la Administración de Justicia de la Generalitat Valenciana tendrán la obligación de prestar asistencia pericial en los procedimientos judiciales para los que se les haya designado, salvo que concurren las causas generales de abstención o recusación.

2. El personal empleado público incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de la Administraciones Públicas, no percibirá honorarios por dicha intervención, sin perjuicio del derecho a las indemnizaciones por razón del servicio, gratificaciones extraordinarias o conceptos retributivos similares que procedan, cuando la colaboración judicial se prolongue más allá de su jornada laboral, y que serán abonados por la Conselleria u organismo del que dependan de acuerdo con las normas vigentes en materia de indemnizaciones por razón del servicio en el ámbito de la Generalitat.

Artículo 5. Prestación del servicio por las entidades adjudicatarias de los contratos administrativos.

1. El órgano administrativo competente en materia de justicia, en el marco de la legislación en materia de convenios y contratos del sector público, podrá suscribir convenios y contratos cuyo objeto sea la prestación del servicio de peritaciones judiciales.

2. Las entidades adjudicatarias de los contratos administrativos deberán prestar el servicio siempre que el objeto de la asistencia se corresponda con una especialidad incluida en el contrato.

3. El órgano administrativo competente en materia de justicia podrá elaborar pliegos tipo de prescripciones técnicas generales para la contratación de los servicios de asistencia pericial, que regirán en todas las licitaciones que sean convocadas en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

Artículo 6. Prestación de la asistencia de profesionales privados.

1. Cuando no sea posible realizar la asistencia pericial solicitada por medio de personal empleado público, personal técnico propio y organismos dependientes de los órganos jurisdiccionales o de la Generalitat, o a través de las entidades adjudicatarias de los contratos administrativos suscritos al amparo de la normativa vigente en materia de contratación del sector público, en los términos establecidos en el artículo 3 de esta orden, se designará a profesionales técnicos privados de entre aquellos/as que integren las listas elaboradas conforme a lo dispuesto en el artículo 341 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

2. Los listados de profesionales de carácter privado pertenecientes a los colegios profesionales o, en su defecto, a entidades análogas, academias e instituciones culturales y científicas, serán confeccionados, en su materia, por los mismos, con absoluta independencia y responsabilidad en cuanto al sistema de selección y clasificación de los profesionales, que deberá respetar los criterios de cualificación profesional, especialización y experiencia.

Por cada colegio profesional o, en su defecto, entidad análoga, academia e institución cultural y científica se acreditará la formación y el control deontológico de los profesionales que compongan las listas.

Cada colegio profesional o entidad análoga, academia o institución seleccionará un número suficiente de profesionales técnicos privados para garantizar la eficiencia del servicio. Las listas serán públicas y comunicadas al órgano administrativo competente en materia de justicia, así como a los órganos de gobierno de los Tribunales, en el mes de enero de cada año. Asimismo, habrán de facilitarse a los órganos judiciales y fiscales a través de medios electrónicos.

3. Los profesionales técnicos privados que reúnan los requisitos de cualificación técnica, formación y experiencia práctica que el colegio profesional o entidad análoga, academia o institución determine y la Administración de Justicia requiera, podrán inscribirse voluntariamente a dichas listas. La adscripción a las mencionadas listas somete al profesional a los deberes de aceptar el nombramiento, salvo incompatibilidad, incluidas las reguladas en el artículo 1.2 de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o causa justificada, así como comparecer a los requerimientos de la Administración de Justicia y guardar secreto de las actuaciones que conozca como consecuencia de su intervención, según lo dispuesto en las correspondientes normas procesales.

4. Por el órgano judicial o fiscal se efectuará la designación del profesional técnico privado por medio de las aplicaciones informáticas para la gestión de profesionales puestas a disposición de los órganos judiciales y fiscales por el órgano administrativo competente en materia de justicia. No obstante, cuando no resulte posible la designación de forma telemática, el órgano judicial o fiscal remitirá la solicitud directamente al colegio profesional, entidad análoga, academia o institución mediante la cumplimentación del modelo normalizado de solicitud que se adjunta como Anexo II a la presente orden. Este modelo normalizado estará a disposición de los órganos judiciales y fiscales en la Intranet de la Administración de Justicia.

Artículo 7. Tramitación y abono de gastos de las pruebas periciales realizadas por medio de recursos propios.

1. Cuando el servicio de asistencia pericial se efectúe por personal empleado público y personal técnico adscrito a la Administración de Justicia de la Generalitat Valenciana, una vez elaborado el informe, el órgano administrativo competente en materia de justicia remitirá al órgano judicial un certificado de los costes asumidos, a los efectos de tramitar el posible reintegro de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 12.

Para la elaboración del certificado de los costes se tendrá en cuenta el número de horas que el personal empleado público ha dedicado a la elaboración del informe, las cantidades abonadas en concepto de indemnizaciones por razón del servicio, gratificaciones extraordinarias o conceptos retributivos similares, así como el coste de los medios materiales utilizados en la realización de la asistencia.

2. Cuando la asistencia pericial se practique por medio de las entidades adjudicatarias de los contratos administrativos, éstas aportarán al procedimiento, en el momento de la entrega del informe la determinación del importe de sus servicios, de conformidad con lo dispuesto en el pliego de prescripciones técnicas del contrato para la prestación del servicio de peritaciones judiciales vigente.

3. En ningún caso la conselleria competente en materia de justicia abonará provisiones de fondos a las entidades adjudicatarias de los contratos administrativos.

Artículo 8. Tramitación y abono de gastos de las pruebas periciales realizadas por profesionales privados. Pago por baremo.

1. Cuando el servicio de asistencia pericial se efectúe por personal técnico privado perteneciente a colegio profesional o, en su defecto, entidad análoga, academia e institución cultural y científica, una vez finalizada la asistencia pericial, el profesional deberá presentar ante su respectivo colegio, o entidad análoga, academia o institución, justificante de la designación telemática efectuada por el órgano judicial (o modelo Anexo II cuando no haya podido efectuarse la designación por medios telemáticos) y el modelo normalizado de acreditación del servicio prestado que se adjunta como Anexo III a la presente orden, debidamente cumplimentado y sellado por el órgano judicial o fiscal.

2. Cada colegio profesional o entidad análoga, academia o institución remitirá trimestralmente al órgano administrativo competente en materia de justicia, certificación que contenga la relación de profesionales privados que hayan realizado el servicio de peritación judicial, las materias objeto de asesoramiento y el número de pericias realizadas. Asimismo, el colegio profesional o entidad análoga, academia o institución deberá adjuntar el justificante de la designación telemática efectuada por el órgano judicial o fiscal (o modelo Anexo II cuando no haya podido efectuarse la designación por medios telemáticos) y el modelo normalizado de acreditación del servicio prestado (Anexo III) cumplimentado y sellado por el órgano judicial o fiscal.

3. Los modelos normalizados de acreditación de los servicios prestados (Anexo III) serán facilitados a los profesionales integrantes de las listas inscritos en el turno de peritajes por el propio colegio o entidad análoga, academia o institución, estando asimismo disponibles en la sede judicial electrónica de la Comunitat Valenciana y en el portal web de la conselleria competente en materia de justicia.

4. Por el órgano administrativo competente en materia de justicia se efectuarán los libramientos que correspondan, en función de las liquidaciones trimestrales presentadas por cada colegio o entidad análoga, academia o institución, sin necesidad de que se haya

dictado resolución judicial que ponga fin al proceso.

5. El pago de las liquidaciones trimestrales se hará con cargo a las dotaciones presupuestarias de la consellería con competencias en materia de justicia, de conformidad con lo dispuesto en el baremo que figura como Anexo I a la presente orden.

6. Cuando el servicio de asistencia pericial se efectúe por personal técnico privado no perteneciente a colegio profesional o, en su defecto, entidad análoga, academia e institución cultural y científica, una vez finalizada la asistencia pericial, el profesional deberá remitir al órgano administrativo competente en materia de justicia el modelo normalizado de designación (Anexo II), el modelo normalizado de acreditación del servicio prestado (Anexo III) debidamente cumplimentado y sellada por el órgano judicial o fiscal, así como la correspondiente factura, que deberá ajustarse en todo caso a los importes económicos establecidos en el baremo que figura como Anexo I a la presente orden.

7. Recibida la factura y la documentación acreditativa del servicio pericial prestado, se comprobará la concurrencia de los supuestos que determinan que la Administración de la Generalitat Valenciana hubiera de asumir el pago de la misma y, en su caso, se procederá al pago.

8. Abonada la factura de honorarios, el órgano administrativo competente en materia de justicia remitirá comunicación del pago efectuado al órgano judicial y solicitará la posible inclusión de dichos gastos en costas.

9. En ningún caso la consellería competente en materia de justicia abonará provisiones de fondos al personal técnico privado.

Artículo 9. Supuesto excepcional de especial complejidad.

1. Excepcionalmente, y por razones de especial complejidad, el órgano administrativo competente en materia de justicia podrá autorizar, mediante resolución motivada, el pago de facturas a profesionales técnicos privados cuyo coste exceda de los importes económicos establecidos en el Baremo que figura como Anexo I a la presente Orden, siempre que se ponga de manifiesto que concurren los siguientes requisitos:

a) Que la asistencia pericial consista en la valoración de un número elevado de objetos o personas, siempre y cuando ésta resulte especialmente compleja.

b) Que para realizar el dictamen pericial sea necesario utilizar medios, y estos sean especialmente costosos y no se puedan entender como habituales. En estos casos el órgano administrativo competente en materia de justicia podrá avanzar los gastos necesarios para realizar el dictamen.

c) Que, atendida la naturaleza del objeto del dictamen, éste requiera la intervención de más de un profesional.

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, si el órgano administrativo competente en materia de justicia considera que concurren al menos dos de los tres requisitos enumerados, podrá autorizar el incremento de la cantidad que correspondería según el Baremo hasta un máximo de un 40%.

3. En el supuesto previsto en el apartado primero, el profesional técnico privado deberá enviar al órgano administrativo competente en materia de justicia, con carácter previo a la emisión del dictamen, y para su aprobación, escrito justificativo de la concurrencia de los requisitos. Recibido el escrito, y con carácter previo a autorizar el pago, el órgano

administrativo competente en materia de justicia deberá solicitar un informe razonado del órgano judicial o Ministerio Fiscal que hubiera ordenado la práctica de la pericia.

4. El órgano administrativo competente en materia de justicia dispondrá del plazo máximo de quince días hábiles desde la recepción de la documentación para aprobar o denegar motivadamente el pago. Transcurrido este plazo sin haberse dictado y notificado resolución expresa, se entenderá aprobada la solicitud por silencio administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.

5. En el supuesto de que se prescinda total o parcialmente del procedimiento descrito, el órgano administrativo competente en materia de justicia únicamente abonará las cantidades establecidas en el Baremo que figura como Anexo I a la presente Orden.

6. Se exceptúa la obligación de presentar la documentación prevista en el apartado 3 cuando la designación para la prueba pericial se efectúe por los Juzgados en funciones de Guardia.

Artículo 10. Reintegros.

1. La Administración de la Generalitat Valenciana tendrá derecho al reintegro de las sumas abonadas en concepto de pruebas periciales en los supuestos previstos en el artículo 61 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunitat Valenciana.

2. Asimismo, también tendrá derecho al reintegro cuando la resolución que ponga fin al proceso condene en costas a una de las partes, en los casos de designación judicial de perito de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal.

Artículo 11. Certificado de la resolución que pone fin al proceso.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales (Real Decreto 1608/2005 de 30 de diciembre) la conselleria competente en materia de justicia podrá recabar la colaboración de los Secretarios/as Coordinadores Provinciales para dictar las oportunas instrucciones o protocolos en relación con la remisión de los certificados de firmeza de las resoluciones que pongan fin al procedimiento y las que aprueben, en su caso, las tasaciones de costas que deban ser notificadas al órgano administrativo competente en materia de justicia con el fin de proceder, cuando corresponda, al reintegro de las cantidades abonadas.

Artículo 12. Procedimiento de reintegro.

1. Cuando la prueba pericial hubiera sido realizada por medio de recurso propios, el órgano administrativo competente en materia de justicia podrá solicitar la práctica de la tasación de costas por las cantidades que hubieran sido certificadas, exigiéndose el reembolso en la forma que establece el Reglamento General de Recaudación.

2. Cuando la prueba pericial hubiera sido realizada por personal técnico privado incluido en las listas confeccionadas por los colegios profesionales o entidades análogas, academias o instituciones, que hubieran obtenido judicial o extrajudicialmente el pago de la totalidad o parte de sus honorarios, procederán a reintegrar a su respectivo colegio o entidad análoga, academia o institución el importe de la suma percibida de este con cargo a fondos públicos, en el plazo de un mes. A su vez, el colegio o entidad análoga, academia o institución deberá efectuar el reintegro al órgano administrativo competente en materia de justicia en la siguiente liquidación trimestral.

3. Cuando la prueba pericial hubiera sido realizada por personal técnico privado no

incluidos/as en el apartado anterior que hubieran obtenido judicial o extrajudicialmente el pago de la totalidad o parte de sus honorarios, procederán a reintegrar al órgano administrativo competente en materia de justicia el importe percibido con cargo a fondos públicos, exigiéndose el reembolso en la forma que establece el Reglamento General de Recaudación.

Disposición adicional primera.

Se autoriza a la persona titular de la Dirección General que ostente las competencias en materia de justicia, para dictar las resoluciones oportunas a fin de modificar el baremo que figura como Anexo I a la presente Orden, en función de las necesidades que se detecten y de la disponibilidad presupuestaria.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto a esta Orden y expresamente la Orden de 23 de julio de 2001, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, sobre organización y funcionamiento del sistema de peritaciones judiciales.

Disposición final primera. Habilitación normativa.

Se autoriza a la Dirección General competente en materia de justicia para que, en el ámbito que tiene atribuido, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el *Diario Oficial de la Generalitat Valenciana*.

Valencia, La Consellera de Justicia, Interior y Administración Pública,

ANEXO I
BAREMO DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA

TÉCNICOS CON TITULACIÓN GRUPO I	800 EUROS
TÉCNICOS CON TITULACIÓN GRUPO II	500 EUROS
RESTO DE TÉCNICOS	400 EUROS

TITULACIÓN GRUPO I

Titulados con grado o grado y máster, según el caso, de:

- Arquitectura
- Ingeniería Superior
- Medicina
- Economía
- Biología
- Química
- Psicología
- Otras titulaciones equivalentes

TITULACIÓN GRUPO II

- Aparejador o arquitecto Técnico
- Ingeniero Técnico
- Otras titulaciones equivalentes